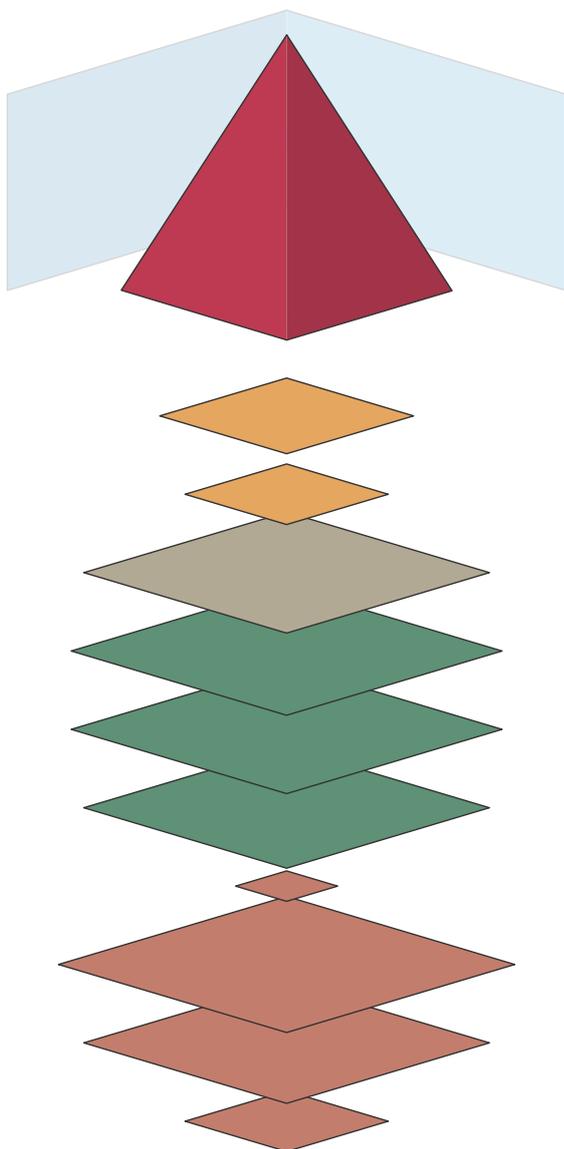


BRASIL



6,50

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

22.º de 193 países

7.º de 35 países americanos

4.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES **6,50**

TRATA DE PERSONAS **5,00**

TRÁFICO DE PERSONAS **4,00**

TRÁFICO DE ARMAS **8,00**

DELITOS CONTRA LA FLORA **8,50**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **8,50**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **8,00**

COMERCIO DE HEROÍNA **2,00**

COMERCIO DE COCAÍNA **9,00**

COMERCIO DE CANNABIS **8,00**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **4,00**



ACTORES CRIMINALES **6,50**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **7,50**

REDES CRIMINALES **6,50**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **8,50**

ACTORES EXTRANJEROS **3,50**



5,04

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

87.º de 193 países

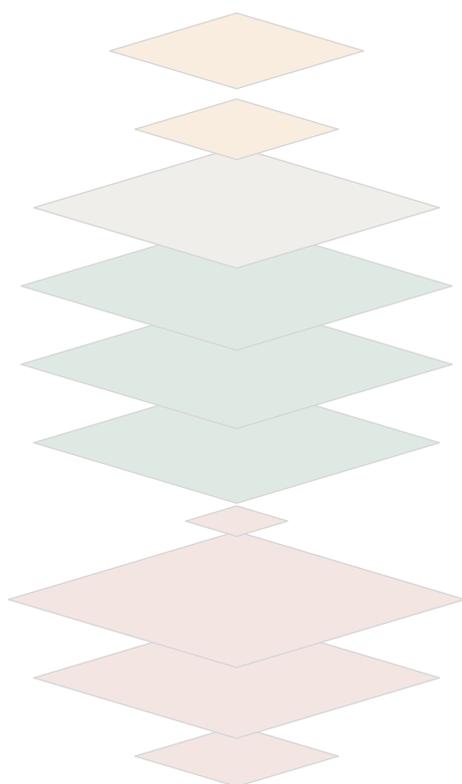
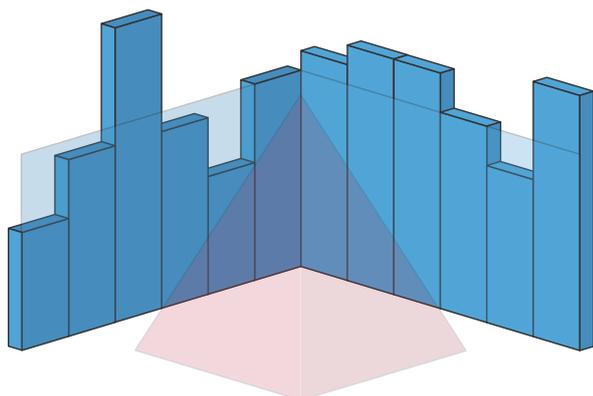
17.º de 35 países americanos

6.º de 12 países de América del Sur





BRASIL



5,04

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

87.º de 193 países

17.º de 35 países americanos

6.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	3,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	7,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	4,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	6,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	4,00
ACTORES NO ESTATALES	6,50



6,50

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

22.º de 193 países

7.º de 35 países americanos

4.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 6,50



ACTORES CRIMINALES 6,50



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Brasil es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata de personas en América Latina, las Islas del Caribe, África y China. Ciudadanos brasileños son víctimas de la trata de personas, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente a España, Portugal y Estados Unidos. Aunque rara vez se reportan, se han registrado casos de explotación sexual y laboral, adopciones internacionales ilegales y tráfico de órganos. Los autores de estos delitos suelen ser familiares o amigos de las víctimas, contratados por redes agrícolas, industriales o de trabajo sexual.

Si bien históricamente ha sido un país de tránsito y de origen, Brasil también se ha convertido en un país de destino para el tráfico de personas. Las circunstancias socioeconómicas y políticas en América Latina han generado un aumento de los flujos migratorios, con la llegada de bolivianos, venezolanos, peruanos y haitianos a Brasil, lo que ha dado lugar al nacionalismo. Los estados del norte de Brasil se vieron gravemente afectados durante el éxodo venezolano, debido a las rutas de entrada irregulares y a la falsificación de documentos por parte de contrabandistas y coyotes. Brasil es un país de tránsito para cubanos, haitianos y otros ciudadanos, así como un país de origen de migración a Estados Unidos. Recientemente se han desmantelado grandes redes de tráfico proveniente de África, Oriente Medio y Asia.

TRÁFICO

Brasil es uno de los mayores productores y exportadores de armas pequeñas, muchas de las cuales se vuelven a introducir de contrabando en el país, principalmente desde Paraguay, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Colombia y Uruguay. Armas de mayor calibre, procedentes de los mercados legales de Estados Unidos y contrabandeadas a través de Paraguay o directamente a Brasil, son utilizadas para el crimen organizado, la acción policial ilegal y la autodefensa.

Brasil también es un exportador de armas ilegales, incluyendo a Yemen, y sus puertos aéreos y marítimos son muy vulnerables al tráfico de armas. Muchas armas propiedad de civiles no están registradas y el mercado adolece de falta de transparencia, ineficiencia y corrupción. Las armas de fuego incautadas por la Policía rara vez se indexan, sino que se «pierden», se «extravían» o son robadas.

El mercado ilegal está controlado principalmente por militares y policías corruptos, así como por redes criminales transnacionales y bandas involucradas en el tráfico en toda América del Sur. Las armas de fuego ilegales son fácilmente disponibles, especialmente para los delincuentes jóvenes

y los grupos organizados. Las altas tasas de homicidio y la violencia entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad se atribuyen principalmente a las armas de fuego ilegales.

MEDIOAMBIENTE

La extracción ilegal de madera y la biopiratería, facilitadas por la corrupción, son importantes en Brasil. En la selva amazónica y atlántica, la biopiratería implica a científicos, empresas farmacéuticas y la industria alimentaria. La mayor parte de la madera exportada desde la Amazonía se obtiene de forma ilegal y las exportaciones están destinadas principalmente a Estados Unidos, Francia, España, los Países Bajos, Portugal, Japón y el Reino Unido. La tala, que a menudo es seguida por la cría de ganado, implica actividades de apoyo paralelas y grandes redes delictivas, y las empresas legales a menudo también están involucradas en prácticas irregulares. Además, en el año 2020, los incendios forestales en la Amazonía brasileña aumentaron considerablemente en comparación con el año anterior y una proporción significativa de los incendios han sido provocados deliberada e ilegalmente por agricultores y otros trabajadores agrícolas como un medio para convertir la selva tropical en tierra cultivable. En julio del 2020, las revelaciones de que un funcionario del Gobierno en Brasil había abandonado deliberadamente la imposición de multas por deforestación ilegal fueron el «punto álgido» de la crisis de la deforestación en Brasil.

Los actores criminales de la Amazonía son responsables de asesinatos y violencia, particularmente de indígenas, activistas y autoridades. Brasil es uno de los principales países de origen de la fauna comercializada ilegalmente, especialmente de aves. El mercado involucra a individuos que venden fauna para complementar sus ingresos y suministran a grandes redes criminales nacionales e internacionales, que utilizan la corrupción y el soborno para falsificar documentos y eludir las inspecciones. Los animales, que incluyen anacondas, tortugas, guacamayos, tucanes y serpientes, se venden a Estados Unidos y Europa para coleccionistas privados, con fines científicos, para la industria de la moda y los recuerdos y para ser usados como mascotas. Aunque el comercio pone en peligro los ecosistemas y conlleva el riesgo de propagar enfermedades, es aceptado socialmente.

El auge de la minería ilegal de oro amazónico se apoya en pequeños mineros en redes criminales mayores. El mercado ilegal de esmeraldas, topacios imperiales y diamantes también es importante y estos últimos se venden en Francia, Suiza e Italia. Brasil es un país de tránsito de oro y diamantes, que conecta con Venezuela y la Guayana Francesa. El oro venezolano a veces se legaliza en Brasil y se exporta a la India y los Emiratos Árabes Unidos. El auge actual de la minería de oro se ve facilitado por la permisividad y la pandemia de la COVID-19. La minería ilegal causa deforestación, erosión

y contaminación del agua y sus efectos relacionados, como la violencia, la trata de personas y el contrabando de drogas, se han denunciado en tierras protegidas e indígenas de la Amazonía.

DROGAS

Aunque el comercio de cocaína de Brasil es uno de los más importantes del mundo, la droga se origina principalmente en los países andinos y se envía a Europa, Oriente Medio, África y Oceanía. El mercado interno y la demanda de base de cocaína (pasta base) son considerables. La cocaína es el principal impulsor del crimen organizado, alimentando la corrupción, los homicidios, el lavado de dinero, las dificultades de vigilancia de las fronteras y la violencia letal perpetrada por grupos criminales y las fuerzas de seguridad.

Durante décadas, las élites locales de las regiones fronterizas han competido con grupos criminales para controlar las rutas mayoristas de cocaína de Brasil. Las ganancias de estas operaciones quedan en manos de estas élites y grupos criminales y también van a los mercados ilegales de seguridad del Estado, organizaciones criminales transnacionales colombianas y mafias. Si bien el mercado de clase media no es violento, las periferias urbanas y los barrios pobres tienen mercados grandes y, a menudo, violentos.

Brasil posee el mercado de cannabis más grande de América Latina. Si bien algunos actores también venden cocaína, ambas drogas tienen circuitos independientes para la clase media y la élite. Brasil solía producir una gran parte de su cannabis, pero, tras el aumento del consumo, Paraguay se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento. São Paulo y Río de Janeiro son centros de consumo de cannabis importado, mientras que en el norte también se comercializa cannabis colombiano. Grandes grupos criminales han conquistado el mercado mayorista, llegando también a controlar el cultivo, pero varias redes e individuos participan en el comercio minorista.

Si bien el consumo de heroína es escaso en Brasil, incautaciones ocasionales indican que se utiliza como país de tránsito y que actores extranjeros lideran las transacciones. El mercado de drogas sintéticas no es prevalente y su uso queda limitado a la clase media-alta y a la élite. Una cantidad limitada del comercio internacional se realiza en Internet y redes nacionales están involucradas en pequeñas fábricas improvisadas. El LSD, el éxtasis y otras drogas llegan esporádicamente a Brasil desde Europa a cambio de cocaína. Brasil tiene una alta incidencia de contrabando de medicamentos farmacéuticos legales de Paraguay. En la zona de la Triple Frontera, varios tipos de actores criminales son responsables de la cadena del mercado.

ACTORES CRIMINALES

La organización criminal más poderosa de Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC), inspirada en el Comando Vermelho (CV), nació como un grupo de autoprotección para los presos. Ambas organizaciones ejercen su control desde las cárceles a través de funcionarios corruptos y están involucradas en la venta de drogas, la extorsión y la prestación de servicios públicos en zonas marginadas. Su acceso significativo a las armas ha contribuido a la violencia en todo el país, así como a disturbios y masacres en las cárceles. En elecciones anteriores, se ha recurrido a las fuerzas federales para vigilar a estos grupos. El PCC, que también está activo en Paraguay, también está involucrado en asaltos a bancos, robos de automóviles, secuestros y lavado de dinero.

Grupos criminales de cuello blanco operan como mafias en Brasil, facilitando la corrupción y el lavado de dinero. Milicias, que a menudo incluyen a agentes de policía, están involucradas en la extorsión y la ejecución extrajudicial de candidatos políticos. También controlan el suministro de gas, el transporte público, propiedades alquiladas y apuestas ilegales. Se cree que estos grupos paramilitares están detrás de la reciente violencia política. Aunque predominantemente urbanos, son contratados por empresas y terratenientes en áreas rurales para expulsar a los residentes por la fuerza.

La participación de los actores estatales en los mercados criminales es clave para su éxito, como demuestra el uso de recursos estatales por parte de las milicias, el financiamiento y designación de candidatos políticos y la coerción de votantes. Delitos de cuello blanco, incluyendo la negociación de contratos públicos, también involucran a funcionarios gubernamentales. En lo que se refiere a los actores extranjeros, las regiones de la Triple Frontera y del Amazonas albergan actividad delictiva nacional y extranjera. Redes extranjeras, especialmente las que controlan los mercados de drogas en los países de destino, utilizan actores nacionales como facilitadores.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Aunque el crimen organizado ha sido una prioridad del Gobierno, Brasil no puede ejercer la gobernanza en muchas áreas urbanas de bajos ingresos. Faltan estrategias para abordar las fallas políticas y de desarrollo y la abrumadora cantidad de causas judiciales ha llevado a la impunidad. Las iniciativas actuales de lucha contra el crimen organizado se centran en estrategias punitivas y operaciones militarizadas. Es probable que algunas de las políticas del presidente Jair Bolsonaro para relajar la legislación relacionada con la posesión de armas e incentivar la minería en tierras indígenas hayan tenido un impacto negativo en la seguridad. Históricamente, Brasil ha sufrido de corrupción y el liderazgo político se ejerce a través de sistemas de patrocinio y tratos recíprocos con el Congreso. Los niveles de violencia en todo el país se han mantenido altos: los homicidios aumentaron en el año 2020 con respecto al año anterior y los ataques contra políticos se intensificaron durante las elecciones municipales de noviembre.

A lo largo de la pandemia de la COVID-19 se realizaron numerosas denuncias de prácticas corruptas que involucran a funcionarios estatales de alto nivel en procesos de contratación pública. El proceso democrático ha caído en manos de organizaciones criminales y existen sospechas de que miembros del PCC y grupos criminales del CV se han postulado como candidatos electorales. Aunque los tribunales son independientes y chocan frecuentemente con el Poder Ejecutivo de Brasil, han sido acusados de sesgo político en operaciones anticorrupción y sus mecanismos de enjuiciamiento no son muy eficaces para disuadir la corrupción o el crimen organizado. Si bien el acceso a la información parece sólido, ha habido una notable disminución de la transparencia en general en casi todos los ámbitos, incluyendo la salud pública, el medioambiente y la seguridad pública, entre otros.

Brasil ha firmado y ratificado numerosos tratados y convenciones en materia de tráfico de armas, drogas y trata de personas y tiene acuerdos de extradición con varios países, así como un acuerdo con el Mercosur. Brasil también tiene acuerdos de cooperación con agencias internacionales y Gobiernos, así como leyes e instituciones nacionales relacionadas con la lucha contra el crimen organizado. La Fiscalía General, los tribunales, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos son generalmente independientes y pueden investigar la corrupción política y la violencia criminal.

La legislación penal y procesal en general es sólida, aunque el Poder Judicial carece de capacidad y adolece de ineficacia, corrupción y patrocinio. El Código Penal de Brasil prohíbe las asociaciones criminales y existen otras leyes para combatir las organizaciones criminales transnacionales, los delitos ambientales, el armamento no autorizado, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la adulteración de medicamentos y alimentos y la explotación humana.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

A pesar de las deficiencias dentro del sistema judicial, incluyendo los altos niveles de corrupción y extralimitación política en el Poder Judicial, las instituciones como la Fiscalía General y la Policía Federal parecen bastante eficaces en la investigación de delitos. Sin embargo, las cárceles sufren de hacinamiento y altas tasas de detención preventiva. Aunque existe un régimen de detención especial para los miembros de grupos criminales, las condiciones precarias en muchas de las cárceles de Brasil han contribuido a que pasen a estar controladas por delincuentes. Además, la expansión de las políticas de criminalización y las estrategias policiales militarizadas no han ido acompañadas del correspondiente aumento de las capacidades de procesamiento judicial. Aunque su presupuesto es comparativamente alto, la Policía no está equipada para investigar el crimen organizado. Existen unidades especializadas contra el crimen organizado dentro de la Policía Militar, la Policía Federal y la Policía de Río de Janeiro. La fuerza nacional, compuesta por policías y bomberos, ayuda en situaciones de inestabilidad, incluyendo las elecciones. Sin embargo, los enfoques de seguridad pública militarizada han provocado una falta de confianza de la opinión pública, agravada por la cooperación ineficaz entre las diversas fuerzas policiales de Brasil. En junio del 2020, la Corte Suprema anunció la prohibición de las redadas policiales en las favelas de Río de Janeiro en medio de la pandemia de la COVID-19, pero las fuerzas policiales a menudo ignoraron el fallo y cientos de personas fallecieron como resultado.

Las fronteras extremadamente permeables de Brasil, compartidas con 10 países y atravesadas por selvas, ríos y lagos, abarcan las principales rutas transnacionales de tráfico de drogas. La Triple Frontera constituye un centro importante de actividades delictivas, particularmente para el contrabando de drogas y otros bienes ilegales. La Fiscalía General y la Policía Federal han detenido a delincuentes que operan en esta zona, pero la actividad delictiva sigue siendo extensa. Las Fuerzas Armadas tienen planes a largo plazo para construir una infraestructura de monitoreo fronterizo, pero las autoridades también enfrentan desafíos para mantener una presencia efectiva en otros lugares, particularmente en ciertos barrios periféricos.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Brasil tiene un riesgo moderado de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Tiene un buen historial en el procesamiento de casos que involucran organizaciones criminales y corrupción de alto nivel y sus leyes sobre lucha contra el lavado de dinero se han modificado en un intento por mejorar las tasas de enjuiciamiento por ocultamiento de bienes. Sin embargo, en general, la capacidad del Estado para investigar el lavado de dinero sigue siendo baja. Aunque se

ha elogiado a la institución encargada de las transacciones financieras sospechosas, la rendición de cuentas sigue siendo una preocupación.

Las empresas pueden registrarse en línea y el intercambio de información ha mejorado. Aunque el Gobierno ha tomado medidas para simplificar la burocracia, reformar los sistemas de pensiones y enjuiciar la evasión fiscal, las complejas leyes y regulaciones de Brasil, los altos impuestos y la burocracia han resultado en un lento crecimiento económico. En general, la capacidad del Estado para regular la economía de manera efectiva es relativamente baja, como demuestra la considerable economía informal que facilita el crecimiento y desarrollo de los actores del crimen organizado.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Si bien Brasil tiene programas que brindan apoyo, atención médica y asistencia psicológica a las víctimas y testigos de delitos, se podría hacer más para ayudar a quienes intentan escapar de formas contemporáneas de esclavitud. Las víctimas de delitos a veces son tratadas como delincuentes o incluso son asesinadas por la policía. Además, aunque exista un programa de protección de testigos, en la práctica no es eficaz. Instituciones gubernamentales y no estatales han implementado campañas para crear conciencia sobre los delitos contra la fauna, así como contra el tráfico de drogas y la trata de personas, y trabajan con el Congreso y el Senado para apoyar cambios en la legislación. Sin embargo, los mecanismos de prevención complejos que incluyan políticas de desarrollo socioeconómico son escasos y las cárceles y los condominios cerrados continúan albergando a los jefes del crimen. Además, los abogados que trabajan en la Amazonía han denunciado constantemente las dificultades que existen para prevenir las actividades ilícitas en la región, debido en parte a la falta de acuerdos y de cooperación entre el Estado y el sector privado.

En áreas urbanas, organizaciones de la sociedad civil brindan asesoría legal, educación y servicios de salud en respuesta a la negligencia estatal. En otros lugares, los activistas y líderes indígenas que luchan por proteger el medioambiente son objeto de hostigamiento y asesinatos. Los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales han criticado a las fuerzas de seguridad del Estado por las operaciones de mano dura contra el crimen organizado y, aunque los medios de comunicación denuncian sistemáticamente la corrupción, su cobertura del crimen organizado es baja. Brasil es uno de los países más violentos de América Latina para los medios y los periodistas a menudo son víctimas de amenazas, ataques y asesinatos. Los periodistas de investigación suelen ser objeto de procedimientos judiciales abusivos y ataques a sus fuentes. La propiedad de los medios de comunicación sigue estando concentrada en manos de grandes familias empresariales con estrechas conexiones con la élite política.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.